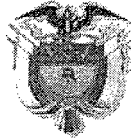


REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA- NORTE DE SANTANDER

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CUCUTA

Cúcuta, 12 3 JUL 2020

PROCESO: LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL
RADICADO: 54 001 40 03 008 2018 00849 00
SOLICITANTE: ELISEO PEREZ SERRANO

Al despacho se encuentra proceso de la referencia, con el fin de decidir acerca de la procedencia de los recursos de apelación propuestos por el apoderado de la parte demandada y el deudor.

Acerca de los anteriores recursos, infiere esta juzgadora que los mismos no son procedentes, como quiera que la providencia recurrida no se encuentra enmarcada dentro de los autos taxativamente determinados en el artículo 321 del C.G.P., susceptibles de la alzada.

Por lo expuesto, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta,

RESUELVE

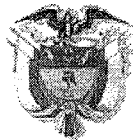
PRIMERO: NO CONCEDER el recurso de apelación a ninguna de las partes recurrentes, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Por secretaría ofíciase y téngase en cuenta que el presente proveído cumple las formalidades de comunicación de que trata el artículo 111 del C.G.P.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

SILVIA MELISA INES GUERRERO BLANCO
JUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA- NORTE DE SANTANDER

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CUCUTA

Cúcuta,

23 JUL 2020

PROCESO: EJECUTIVO MINIMA CUANTIA
RADICADO: 54 001 40 03 008 2019 00650 00
DEMANDANTE: MARIELA SOLANO GUEVARA
DEMANDADO: CINDY CHARLOTTE REYES SINISTERRA

OBJETO DE DECISIÓN

Procede este despacho, en ejercicio de sus competencias legales¹, a resolver la **reposición en subsidio de apelación** interpuesta por la demandada CINDY CHARLOTTE REYES SINISTERRA, en nombre propia, en contra del auto emitido el **15 de noviembre de 2019**, dentro del proceso EJECUTIVO, instaurado por MARIELA SOLANO GUEVARA contra la recurrente, mediante el cual se decretaron unas medidas cautelares.

ANTECEDENTES

Por auto del **15 de noviembre de 2019**, esta Unidad Judicial resolvió lo siguiente:

- No acceder a la solicitud de la señora CINDY CHARLOTTE REYES SINISTERRA, de no decretar las medidas cautelares solicitadas por el extremo demandante; y en consecuencia, se decretó:
- El embargo y retención del 100% de los honorarios devengados o por devengar que se causen a favor de la demandada, como contratista de la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCUTA, la UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, la UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
- El embargo y retención del 100% de los honorarios devengados o por devengar que se causen a favor de la demandada, con ocasión al contrato de prestación de servicios celebrado con los contratantes LAURA ROCIO CARRILLO JURADO y URIEL ANTONIO CASTILLA BALLESTEROS.

Dicha providencia fue recurrida por la CINDY CHARLOTTE REYES SINISTERRA, quien fundamentó su recurso de reposición en subsidio, en lo siguiente:

*"Existen pruebas en el expediente de la situación de presunta extorsión en mi contra, en uso de títulos valores que aunque ya fueron pagados en totalidad **pretenden volverse a cobrar por vía ejecutiva**, pero para soportar aún más esta situación, **allego con el escrito copia de la asignación del caso a la unidad especializada del GAULA contra la aquí demandante y otros familiares**, haciendo cubrimiento del radicado por cuanto estas investigaciones de oficio se pueden frustrar si así expone esta información en el expediente el juzgado siendo confidencial.*

*(...) **este es un proceso para tratar de afectar mi buen nombre y reflejo de lo anterior es precisamente que se soliciten al despacho el decreto de medidas de embargo***

¹ Ver el artículo 318 Código General del Proceso

respecto de salarios con una relación de universidades en donde no tengo ninguna relación laboral, solo para exponer mi nombre con oficios de embargo que no conseguirían la materialización de ninguna medida, pues los solicitantes no acreditan que yo tenga relación laboral alguna con dichas instituciones académicas en la actualidad, pero el juzgado decide decretar dichas medidas.

(...) en el expediente no obra ninguna prueba ni sumaria de que soy trabajadora de ninguna institución académica en la actualidad y aparte en mi condición de litigante se pretende afectar mi buen nombre tratando de oficiar a clientes con quienes no existen ningunos honorarios pendientes, pero al igual que las otras medidas solo tienen la intención de afectarme en el contexto profesional por cuanto el solicitante no tiene prueba ni sumaria de que existan pagos pendientes por embargar, ni que dichos contratos existan y que sean onerosos, solo aporta al juzgador un listado en donde aparecen procesos que llevo pero sin saber el estado en que se encuentran los mismos frente a pagos. Pero con que finalidad se solicita el oficiar a parte de mis clientes ¿será que generando estas medidas se recupera el supuesto dinero adeudado o solo se genera afectación al buen nombre de una persona que se dedica precisamente a actuar como litigante en el medio? Es importante, hacer valoración racional de lo que argumento.

No existe relación como contratista ni de la Universidad Libre de Cúcuta, ni con la Universidad de Medellín, ni con la Universidad de Pamplona, ni con la Universidad de Nariño, pero se quieren enviar estas comunicaciones solo para afectar mi buen nombre y el despacho incluso si persiste en la decisión de decretar estas medidas, se dará cuenta como cada entidad responderá soportando lo que expongo en este punto y la demandada lo conoce. ¿Pero con que finalidad se le están solicitando al despacho estas medidas? En cumplimiento de la presunta extorsión en mi contra, pues como no accedí a entregar los dineros que me exigían, se pretende acabar con mi buen nombre y mi vida profesional, y el despacho tiene copias de lo que narro en el expediente además de la puesta en competencia del GAULA, (...) allego escrito en donde mis clientes ofrecen prueba de lo que se informa al juzgado (...).

Se allega (...) oficio firmado por el representante legal de LEX PROVA S.A.S., en donde certifica que no tengo acciones en dicha sociedad ni tengo calidad de trabajadora, ni contratista de esta.

(...) se le solicita al despacho de forma respetuosa REPONGA el auto donde está decretando medidas cautelares (...), o en su defecto conceda en subsidio, el **RECURSO DE APELACIÓN**, teniendo en cuenta que este auto "siendo en los que se deciden medidas cautelares", permite la interposición del recurso de alzada respectivamente."

Surtido el traslado de Ley², se procede a decidir el recurso formulado, previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

Realizado el control de legalidad que manda el artículo 132 del Código General del Proceso, no se advirtió vicio ni irregularidad alguna que configuren nulidad; y cumplido el traslado que impone el artículo 110 ibídem.

Se memora que el canon 318 adjetivo prevé que el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, "(...) a fin de que se revoquen o reformen", concretando así el objetivo que se persigue con este recurso. Prescribe además, que "deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito", esto es que le incumbe al recurrente hacer la

² Folio 142. C1

respectiva fundamentación expresando las razones que lo determinan para interponer el recurso y por las cuales se considera que la providencia está errada y en consecuencia debe revocarse o reformarse.

En aplicación del principio de preclusión que rige la actividad procesal, deben interponerse dentro del término.

Por sabido se tiene que los yerros en que puede incurrir el fallador, son de dos clases: a) El error in indicando o error de derecho cuando el juez deja de aplicar una norma o la aplica indebidamente o la interpreta en forma equivocada; y b) El error en el procedimiento, que se configura por la inobservancia de trámites o de actuaciones que deben surtirse en desarrollo del proceso.

Así pues, la revocatoria o reforma de una providencia está sujeta a que éstas adolezcan de vicios o ilegalidades existentes al momento de proferirse la providencia, o que se originen en las mismas y por ello las tornen en ilegales.

Ahora, vuelto sobre el tópico en cuestión, se tiene que el problema jurídico a resolver recae en determinar si, tal como lo afirma la parte recurrente CINDY CHARLOTTE REYES SINISTERRA, este despacho incurrió en el yerro al negar la solicitud de no decretar las medidas cautelares solicitadas, a pesar de que se le están cobrando unos dineros ya pagados a la demandante, y porque las nuevas medidas cautelares afectan su buen nombre.

De entrada se le advierte a la demandada que sustentar el recurso contra un auto que decretó medidas cautelares permitidas por la legislación procesal, en que la obligación que se persigue ejecutivamente ya fue pagada a la señora MARIELA SOLANO GUEVARA, deviene de improcedente y hasta absurdo, puesto que, como abogada litigante, debería tener la plena certeza de que la fundamentación fáctica y jurídica para desvirtuar la existencia o validez del título ejecutivo báculo de recaudo, será atendida únicamente a través de las excepciones de mérito que propuso dentro del proceso, que serán resultas en la oportunidad procesal correspondiente; pero para buscar desacreditar el decreto de unas medidas cautelares, tal censura sencillamente resulta inocua, y ello precisamente por la naturaleza de las medidas cautelares de los procesos civiles.

De entrada, memórese que medidas cautelares son *“providencias adoptadas antes, durante o después de un proceso para asegurar o garantizar la eficacia de los derechos objeto de controversia judicial.”*³

A voces del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, *“(…) las medidas cautelares están instituidas con el propósito de asegurar el cumplimiento de las determinaciones que se adopten en los procesos; vale decir lograr que la finalidad última, perseguida con el proceso, se cumpla; sin que las contingencias que se puedan presentar en el transcurso del trámite, impidan que los citados fines se realicen, frustrando con ello las aspiraciones de quienes han agotado una actuación ante la administración de justicia, con el objeto de alcanzar tales propósitos; resultando en últimas, si bien accesorias al proceso, definitivas en cuanto al logro de aquel fin último que motiva el ejercicio de la acción de que se trate.”*⁴ (Subrayado fuera de texto).

Por regla general, toda medida cautelar se caracteriza por ser provisional, temporal Y transitoria, pues el juez natural las adopta mientras se decide de fondo el conflicto o se

³ Las medidas cautelares en el Código General del Proceso. ÁLVAREZ GÓMEZ, Marco A. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, Módulo de aprendizaje autodirigido Plan de formación de la Rama Judicial. 2014.

⁴ Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C. Auto resuelve apelación. Proceso Rad. N° N°. 110013103018200900048 01. 29 de octubre de 2009

satisfaga el derecho sustancial que se reclama; accesoria, porque no pueden concebirse como un proceso independiente; instrumental, puesto que están en función de las pretensiones del proceso judicial, las cuales determinan la clase de medida cautelar a decretar; y por último, es preventiva, ya que aseguran que la providencia en pro del derecho sustancial pueda practicarse.

Las medidas cautelares satisfacen una función específica dentro de todo proceso judicial, sin llegar al erróneo de pensar que abren un proceso paralelo, sino que irradian todo el ordenamiento procesal, al relacionarse directamente con el derecho constitucional fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva.

Entiéndase que *“Las cautelas, en rigor, no son un proceso. No se puede confundir el contenido –o parte de él- con el continente. Cosa distinta es que tengan lugar en el marco de un determinado juicio, que puede ser autónomo, si se agota en la práctica de las medidas cautelares autorizadas –bien porque la satisfacción del derecho se cumple, precisamente, a través de ellas, bien porque tendrán eficacia en el proceso que deba promoverse con posterioridad para que se defina el conflicto jurídico-, o corresponder, como ocurre las más de las veces, al que se impulsa para la realización del derecho reconocido en la ley sustancial.”*⁵ (Subrayado fuera de texto).

Ciertamente, se puede colegir que las medidas cautelares van dirigidas a garantizar las consecuencias del proceso judicial, mediante la conservación de una situación de hecho o de derecho a fin de que las decisiones que se tomen al resolver el conflicto, no se hagan nugatorias, sino que, en cambio, se logre el objetivo perseguido en el proceso declarativo, ejecutivo o liquidatorio.

Por lo mismo, las medidas cautelares no constituyen un juzgamiento anticipado a la parte demandada, ni mucho menos equivalen a una sanción para este, sino que representan una garantía que no presupone que el derecho sustantivo sea cierto, pues para decretarlas basta con que este sea creíble.

Su función radica en contribuir a la materialización del derecho que se persigue para conseguir una tutela jurisdiccional efectiva. En términos generales, las medidas cautelares sirven para varios objetivos, por lo que no es raro que el decreto de cada una refleje distintos propósitos. Uno de estos fines, es preparar la ejecución de la sentencia proferida en favor del demandante, al propiciar que se tomen las acciones que permitan el cumplimiento de esta, verbi gratia, en los procesos ejecutivos, con el embargo y secuestro de los bienes del demandado a partir del auto que libra mandamiento de pago, el legislador pretendió ofrecer las herramientas idóneas para que, una vez en firme el auto de *“seguir adelante con la ejecución”*, se pudiera continuar con acciones precisas – avalúo, liquidación del crédito y remate – que permitirán el pago de la obligación.

Y es que, en los procesos ejecutivos, como este, las medidas cautelares se fundamentan sustancialmente en que con ellas el acreedor busca hacer efectivo el pago de la obligación, es decir, se traducen en la materialización de la persecución del patrimonio del ejecutado, el cual, sobra decir, es prenda común y general del acreedor.

En la tarea de desvirtuar las alegaciones de la demandada, se aclara que en casos como el que se estudia, no es posible equiparar la garantía legítima que persigue la ejecutante con unas medidas cautelares sin certidumbre de perfeccionarse, con la solicitud del

⁵ Las medidas cautelares en el Código General del Proceso. ÁLVAREZ GÓMEZ, Marco A. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Módulo de aprendizaje autodirigido Plan de formación de la Rama Judicial. 2014.

levantamiento de las mismas y que de entrada compromete el cumplimiento de una eventual providencia de seguir adelante con la ejecución.

Partiendo de lo dicho, se puede inferir que la retórica que la señora CINDY CHARLOTTE REYES SINISTERRA emplea para atacar el auto, al decir que *“se pretende acabar con mi buen nombre y mi vida profesional”*, se trata de una afirmación sin asidero, cuando en cambio, la decisión del juzgado en el auto que se recurre, tiene sus cimientos jurídicos en el artículo 2488 del Código Civil, que establece que *“Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose los no embargables designados en el artículo 1677.”*

Concordante con lo anterior, en la regulación de las medidas cautelares en los procesos ejecutivos, el Código General del Proceso determinó en el artículo 599 que *“Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado”*. De esta forma entonces, el legislador permitió instrumentalizar el derecho de persecución aludido.

En consecuencia, si un acreedor puede embargar y secuestrar bienes de su deudor, es gracias al derecho de persecución con el que le facultó la ley y no porque tenga un título ejecutivo, pues este último, es un documento que prueba y respalda el ejercicio de su derecho, por lo que no es admisible confundir el derecho con su prueba.

La decisión tomada en el auto de fecha 15 de noviembre de 2019, no fue producto de la divagación mental de esta juzgadora, tampoco un acto exagerado y mucho menos tentativo al buen nombre de la aquí ejecutada, sino que se trató de una resolución dictada bajo los límites proporcionales, y soportada fundamentalmente en los principios de legalidad – que ya se explicó –; la apariencia de buen derecho, cuyo arquetipo ejemplar se evidencia precisamente en los procesos ejecutivos, donde el título que exhibe el demandante es prueba suficientemente sólida del derecho para respaldarlo con el decreto de la cautela; el peligro de mora judicial, principio con el que se busca evitar una demora judicial – justificada o no que entorpeciera la concreción del derecho sustancial; y finalmente el de la sospecha del deudor o *suspectio debitoris*, que es la recelo hacia el demandado respecto del cumplimiento de la decisión judicial.

Sumamente grave sería si esta judicatura se negara en decretar unas medidas cautelares solicitadas por el apoderado de la demandante, ajustadas a la ley procesal y respaldadas por esta, dentro de un proceso ejecutivo donde ya se libró mandamiento de pago, únicamente porque la demandada teme lo que puedan llegar a pensar de ella.

A esta juzgadora no le interesan las elucubraciones ni tampoco los juicios de valor que terceros ajenos al litigio puedan tener respecto de la reputación social de las partes procesales, sino que se rige por los principios generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes, para una correcta implementación de la justicia.

Finalmente, se le acota a la recurrente, que como las medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo son de naturaleza eminentemente preventiva, el legislador dispuso claramente que *“La interposición de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar decretada. Todos los recursos se consideran interpuestos en el efecto devolutivo”*⁶. Sobra decir que aquí se incluye también el recurso de reposición.

⁶ Código General del Proceso. Artículo 298, inciso tercero.

Y si persiste la insistencia por parte de la señora CINDY CHARLOTTE REYES SINISTERRA en que las medidas cautelares decretadas le causan un perjuicio, puede solicitar las medidas que la normatividad procesal ofrece – artículo 599 del CGP. – e incluso obtener el levantamiento definitivo de los embargos posterior a la ejecución – artículo 602 del CGP. –.

Por otra parte, en cuanto al recurso de apelación propuesto en subsidio de la reposición, se le recuerda a la parte recurrente que la apelación procede por expresa condición normativa, contra las sentencias y algunos autos interlocutorios proferidos en primera instancia⁷, es decir, es condición sine qua non, de procedencia del recurso, que el asunto tenga prevista la doble instancia, situación que en nuestro ordenamiento procesal está consagrada para los procesos de menor y mayor cuantía. No obstante, en esta oportunidad, nos encontramos frente a un proceso de mínima cuantía, que se debe tramitar en única instancia, y para esta Servidora, es claro que existe disposición legal que excluye la segunda instancia en esta clase de asuntos, por lo que, en caso de concederse la apelación presentada, estaría en contravía de un mandato de naturaleza procesal que por ser de orden público y regular un tema de interpretación restrictiva como acontece en general con los "recursos", su acatamiento deviene irrestricto.

Igualmente es menester resaltar que temas alusivos al trámite al que deben someterse las discrepancias traídas a la jurisdicción, la ley gobierna en los términos que considere la forma de rituarse esas disputas y salvo que la propia normatividad lo autorice, el funcionario judicial no puede variar las etapas señaladas ni los mecanismos de censura a las decisiones que profiera. Por supuesto, si por mandato legal en los procesos ejecutivos de mínima cuantía, su trámite es de "única instancia", lo que comporta que, también, lo sean las cuestiones adjuntas que en él se adelanten.

Corolario de lo anterior, al no ser acertados los reproches de la demandada, deviene como único camino jurídico no reponer el auto recurrido por la parte ejecutada que data del 15 de noviembre de 2019.

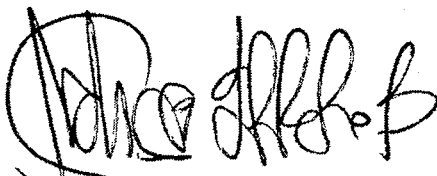
En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CUCUTA-**

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el proveído del **15 de noviembre de 2019**, conforme lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NO CONCEDER el recurso de apelación, por lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

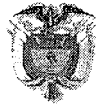


SILVIA MELISA INES GUERRERO BLANCO
JUEZ

⁷ Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
(...)

8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA- NORTE DE SANTANDER
JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CUCUTA

Cúcuta, 23 JUL 2020

PROCESO: VERBAL - REIVINDICATORIO
RADICADO: 54 001 40 03 008 2020 00104 00
DEMANDANTE: GERARDO YAÑEZ BOTELLO
DEMANDADO: BELLY YAIRY YAÑEZ BOTELLO

Se encuentra al despacho la presente demanda DECLARATIVA VERBAL REIVINDICATORIA, para decidir sobre su admisión, y comoquiera que la misma reúne a cabalidad los requisitos exigidos conforme a los artículos 82, 83, 84 y 375 del Código General del Proceso, por lo cual deberá admitirse en la forma solicitada.

Por lo antes expuesto, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Admitir la demanda VERBAL REIVINDICATORIA, formulada por el señor GERARDO YAÑEZ BOTELLO, a través de apoderado judicial, en contra de BELLY YAIRY YAÑEZ BOTELLO.

SEGUNDO: Notifíquese el presente auto a la parte demandada, y córrasele traslado de la demanda por el término de veinte (20) días para que ejercite su derecho de defensa.

TERCERO: Darle a la presente demanda DECLARATIVA el trámite del proceso VERBAL, por ser un asunto de menor cuantía.

CUARTO: Decretar la inscripción de la demanda sobre el bien inmueble el cual se identifica con la matrícula inmobiliaria N°260-47040 de propiedad del demandante GERARDO YAÑEZ BOTELLO. Oficiese al señor Registrador de Instrumentos Públicos de esta ciudad. Por secretaría oficiese y téngase en cuenta que el presente proveído cumple las formalidades de comunicación de que trata el artículo 111 del C.G.P.

QUINTO: Reconocer personería jurídica al abogado VILLAMARIN SEPULVEDA GUERRERO, como apoderado de la parte demandante, en los términos y facultades del poder conferido.

COPIESE Y NOTIFIQUESE.


SILVIA MELISA INES GUERRERO BLANCO
Juez

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA- NORTE DE SANTANDER

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CUCUTA

Cúcuta,

23 JUL 2020

PROCESO: EJECUTIVO
RADICADO: 54 001 40 03 008 2020 00256 00
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A. NIT N°890.903.938-8
DEMANDADO: JOSE DE JESUS BELTRAN GARCIA C.C. N°13.437.600

Se encuentra al despacho la presente demanda ejecutiva de adjudicación o realización especial de la garantía real, para decidir si se libra el mandamiento de pago. A ello debiera procederse, pero advierte esta juzgadora las siguientes falencias:

- a. No se anexó el avalúo a que se refiere el artículo 444 del C.G.P., ni tampoco la liquidación del crédito a la fecha de la demanda; de conformidad con lo exigido por la norma procesal en el numeral 1° del canon 467 ejúsdem.

Lo anterior conlleva al despacho a declarar inadmisibile la presente demanda de conformidad con el artículo 90 del Código General del Proceso, concediendo un término de cinco (5) días para subsanarla, so pena de rechazo.

En mérito de lo expuesto el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar inadmisibile la presente demanda por lo indicado en la parte motiva.

SEGUNDO: Conceder el término de cinco (5) días para subsanarla, so pena de rechazo.

TERCERO: Reconocer personería a la abogada DIANA ESPERANZA LEON LIZARAZO, para actuar como apoderada de la parte demandante, en los términos y facultades del poder que le fue conferido.

COPIESE Y NOTIFIQUESE.

SILVIA MELISA INES GUERRERO BLANCO
Juez

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA- NORTE DE SANTANDER
JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CUCUTA

Cúcuta, 23 JUL 2020

PROCESO: EJECUTIVO CON PREVIAS
RADICADO: 54- 001-40-03-008- 2020-00257-00
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A. NIT N°890.903.938-8
DEMANDADO: AURORA LAISECA CABRERA C.C. N°51.569.785

Se encuentra al despacho la presente demanda ejecutiva para decidir si se libra el mandamiento de pago, y como quiera que la misma reúne los requisitos de ley y los títulos valores base del recaudo prestan mérito ejecutivo, al tenor de lo previsto en el artículo 422 del C. G. P., por contener una obligación clara, expresa y exigible, además de reunir los requisitos de los artículos 621 y 709 del Código de Comercio, este despacho procede a librar mandamiento de pago.

En consecuencia, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenarle a la demandada AURORA LAISECA CABRERA, pagar a BANCOLOMBIA S.A., dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación del presente auto la siguiente obligación dineraria:

- a) ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$11'847.627,00) de capital representado en el pagaré sin número y con fecha de creación el 11 de julio de 2019, más sus intereses moratorios a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, causados a partir del 16 de noviembre de 2019, hasta cuando se cancele la totalidad de la obligación.
- b) SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$6'572.996,00) de capital representado en el pagaré sin número y con fecha de creación el 14 de enero de 2019, más sus intereses moratorios a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, causados a partir del 05 de enero de 2020, hasta cuando se cancele la totalidad de la obligación

SEGUNDO: Notifíquese este auto personalmente a la demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 290 al 296 del C.G.P, haciéndoles saber que tienen un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación para que ejerciten el derecho de defensa.

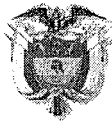
TERCERO: Dar a la demanda el trámite de proceso ejecutivo de mínima cuantía, en única instancia.

CUARTO: Reconocer personería para actuar a la abogada MARIA CONSUELO MARTINEZ DE GAFARO, como endosataria en procuración del demandante, conforme al endoso que aparece en los títulos base de ejecución.

COPIESE Y NOTIFÍQUESE

SILVIA MELINA INES GUERRERO BLANCO
Juez

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA- NORTE DE SANTANDER

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CUCUTA

Cúcuta, 23 JUL 2020

PROCESO: EJECUTIVO CON PREVIAS
RADICADO: 54- 001-40-03-008- 2020-00258-00
DEMANDANTE: LA ARRENDADORA BUENAHORA FEBRES LTDA. NIT. N°890.500.316-7
DEMANDADO: JEFFERSON GERARDO VELASCO REY C.C. N°1.093.772.262
LIZETH VANESSA PACAVITA MENDOZA C.C. N°1.090.469.553

Se encuentra al despacho la presente demanda ejecutiva, para decidir si se libra orden de pago. A ello debiera procederse, si no se observara las siguientes falencias:

En los numerales 5) y 10) del acápite de HECHOS de la demanda, se narra de que los demandados *"dejaron de cancelar los servicios públicos correspondientes a energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, correspondientes a los meses de ENERO y FEBRERO de 2020"*, adeudando la suma de \$718.352; en virtud de lo anterior, en el literal b) del acápite de PRETENSIONES se solicita que se libre mandamiento de pago por dicha la anterior suma de dinero, por concepto de servicios públicos domiciliarios adeudados.

Respecto a la exigibilidad de los pagos por los servicios públicos, el artículo 14 de la Ley 820 de 2003, que jurisprudencialmente se aclaró, es aplicable por analogía al caso bajo estudio por tratarse precisamente del cobro de estos conceptos; dispone que: "En cuanto a las deudas a cargo del arrendatario por concepto de servicios públicos domiciliarios o expensas comunes dejadas de pagar, el arrendador podrá repetir lo pagado contra el arrendatario por la vía ejecutiva mediante la presentación de las facturas, comprobantes o recibos de las correspondientes empresas debidamente canceladas y la manifestación que haga el demandante bajo la gravedad del juramento de que dichas facturas fueron canceladas por él, la cual se entenderá prestada con la presentación de la demanda." (Subrayado fuera de texto).

Pues bien, percata la suscrita que en los anexos de la demanda no se allegaron las facturas de servicios públicos supuestamente adeudadas, con los respectivos soportes de pago, así como tampoco se hizo la manifestación juramentada de que trata el precepto legal que antecede.

Ante tales circunstancias, la demanda se debe declarar inadmisibile, para que sea subsanada en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo.

En mérito de lo expuesto el Juzgado,


RESUELVE:

PRIMERO: Declarar inadmisibile la presente demanda por lo indicado en la parte motiva.

SEGUNDO: Conceder cinco (5) días para subsanarla, so pena de rechazo.

TERCERO: Reconocer personería para actuar a la abogada MARTHA CECILIA LOBO CELIS, como apoderada de la parte demandante, en los términos del poder conferido.

COPIESE Y NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia M. Guerrero Blanco', written over the printed name.

SILVIA MELISA INES GUERRERO BLANCO
Juez